

JOÉ MONSALVE CÁCERES

**LA OLIGARQUÍA
VENEZOLANA Y EL FETICHE
DE LA PROPIEDAD PRIVADA**

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

LA OLIGARQUÍA VENEZOLANA Y EL FETICHE DE LA PROPIEDAD PRIVADA
©Sobre la presente edición

©Universidad Bolivariana de Venezuela.

© JOSÉ MONSALVE CÁCERES

Depósito Legal: lf86120083201870

ISBN: 978-980-6664-70-8

COORDINACIÓN DE EDICIONES Y PUBLICACIONES/ IMPRENTA UBV:

Diseño, diagramación, corrección de pruebas, montaje, filmación de negativos
y fotolito digital e impresión.

Caracas, Venezuela, 2008

Impreso en la República Bolivariana de Venezuela

Printed in República Bolivariana de Venezuela

LA OLIGARQUÍA VENEZOLANA Y EL FETICHE DE LA PROPIEDAD PRIVADA

JOSÉ MONSALVE CÁCERES

Es necesario dejar aclarado de entrada que el diccionario Larousse en su segunda acepción define el fetichismo como una idolatría o veneración excesiva. Culto que se le atribuye a un objeto o fetiche. El DRAE establece igualmente el fetichismo como: ídolo u objeto de culto al que se atribuye poderes sobrenaturales. El Diccionario Marxista de Terminología Política desarrolla el fetichismo como adoración a un objeto inanimado, de un ídolo, imagen, reliquias consideradas milagrosas, etc. Es una de las formas más antiguas de la religión. El Diccionario Filosófico Marxista lo define como: culto a los objetos, una de las primeras formas de las creencias religiosas. El surgimiento del fetichismo está determinado por el bajo nivel de la práctica social, la debilidad de los instrumentos de trabajo y la considerable pobreza de experiencia del hombre antiguo. Por eso es frecuente que el hombre atribuyese a los objetos y fenómenos diarios, propiedades extraordinarias y muchas veces sobrenaturales.

En la economía mercantil, basada en la propiedad privada, surge un fenómeno denominado fetichismo de la mercancía. El fetichismo de la mercancía se manifiesta de manera más evidente en el culto al dinero, al oro, que florece en la sociedad burguesa. Cuando se liquida la propiedad privada, la forma mercantil “se despoja de su velo místico” (Marx) y al mismo tiempo deja de existir el fetichismo de la mercancía.

La propiedad privada, desde tiempos remotos ha sido uno de los derechos fundamentales y básicos de la civilización, ha estado consustanciada con la evolución del hombre a través de la historia y ha sido

la plataforma o eje primordial del ordenamiento jurídico y social de relaciones humanas imperantes en los diferentes Estadios y Modos de Producción.

Son muchas las definiciones y conceptualizaciones que han afectado la idea de este derecho ciudadano y la discusión en torno a los límites y atributos de la propiedad, y en especial, de la propiedad privada. Ella ha sido una constante, la cual ha definido el sistema de relaciones sociales entre los hombres en todos los estadios de la civilización y en forma imperativa, en su modo de producción. Una visión histórica en torno a lo que ha significado la propiedad privada en la humanidad nos indica que existe una estrecha relación con el desarrollo dialéctico del hombre y de las sociedades, de los derechos humanos, naturales y de justicia de los ciudadanos. Algunos académicos consideran a la propiedad privada como un derecho por excelencia para obtener de un objeto toda la satisfacción que este le pueda proporcionar, “*estableciendo un vínculo directo entre el sujeto y el objeto*”, en virtud de la cual las ventajas que pueden procurar de un bien corporal son atribuidas (y deben ser atribuidas) totalmente al propietario para su uso y disfrute. Este enlace o conexión bidireccional entre el sujeto y el objeto, es decir, entre el bien y el propietario, es reconocido desde el derecho romano a todo propietario y se conoce como el *jus utendi* o “derecho de uso”, formando éste el principal atributo del derecho de la propiedad privada, además de goce y del derecho de disposición de la cosa. La tradición contemporánea resume el “derecho de uso” como la facultad de aplicar directamente la cosa o bien para satisfacer las necesidades personales de uso y disfrute de su propietario, es decir, *la facultad para utilizar el bien para el bienestar y satisfacer sus necesidades humanas*. Pero la evolución conceptual, jurídica e ideológica dentro de la dinámica social y con el advenimiento de nuevas fórmulas políticas y cambios en la base social, en la estructura social, en la superestructura social y en las relaciones de producción <*marco jurídico de las relaciones sociales*> en constante cambios y transformaciones, establecen que la *propiedad privada, como*

todo derecho, tiene en principio sus limitaciones; este principio y concepto, de las limitaciones a la propiedad especificado en todas las doctrinas y definiciones de la literatura jurídica debemos precisarlo para tomarlo en cuenta en las nuevas propuestas sobre la propiedad social y colectiva que desarrollaremos mas adelante. Este derecho se encuentra sujeto a restricciones de diversas índole, bien por su ejercicio frente a otros ciudadanos o ante otros sujetos, por razones de desarrollo social, de progresividad de la justicia, de solidaridad humana, del bien común, y restricciones a los excesos y perversidades de un derecho muchas veces pervertido por “uso y abuso” de propietarios, que algunas veces son espurios e impostores sustentando con títulos falsos ese derecho. Por lo anterior es que resulta de especial trascendencia el estudio de este tema puesto que constituye un coto a lo que muchas veces se transforma en un agravio frente a terceros.

Se ha podido comprobar a través de los tiempos, como la propiedad, y en específico la propiedad privada es utilizada como “*herramienta de poder*” de grupos generalmente minoritarios para sojuzgar, someter y dominar a grupos sociales, generalmente mayoritarios. Por lo tanto, no puede ser prevalente algunos de los atributos que la tradición jurídica ha mantenido y pretende seguir manteniendo inalterable, incólume e inmodificable. La propiedad, por lo tanto, es intrínsecamente inseparable de la economía humana en su modalidad social y debe estar en función de los valores axiológicos de la justicia social y en función de los intereses sociales del colectivo y predominar sobre los intereses individuales. La propiedad es un derecho humano y social, por eso la evolución cultural, moral y política nos impulsa a seguir avanzando con el objeto de estimular su *función utilitaria para el hombre y la sociedad*. Las modalidades de la propiedad hoy en día nada tienen de perfectas, por lo tanto, no existe razón para suponer que las específicas formas de propiedad que prevalecen en la actualidad, deben considerarse definitivas. Es necesario precisar que una cosa es hablar de propiedad privada de bienes tangibles, la cual se refiere al derecho que recae sobre

individuos o ciudadanos y otra cosa es la propiedad de los bienes de producción que serán analizados en trabajos posteriores. De lo anterior se desprende que la propiedad, y sobre todo *la propiedad privada, no es un valor absoluto, sagrado, y supraconstitucional*. La propiedad, a través de la historia, muchas veces ha sido obtenida a partir de procesos de apropiación indebida y en su mayoría de origen político o de fuerza. Los orígenes legítimos de la propiedad producto del trabajo individual son realmente escasos; la mayoría tiene intrínsecamente el pecado original de lo ilícito. Las manos, las mentes y los músculos de los trabajadores con su voluntad y esfuerzo son los creadores y generadores de los bienes o productos sociales, es decir, de las riquezas y por trapisondas jurídicas y galimatías legales e instrumentaciones políticas y económicas, explotadores se apropian de los bienes creados por esta “fuerza de trabajo” que son los obreros en las fábricas y los siervos de la gleba en el campo.

Si tomamos por caso la propiedad de la tierra encontramos que el latifundio en Venezuela es producto de la rapiña, de la voracidad y de la corrupción, entre otros delitos. Analizando los últimos 40 años de la cuarta república encontramos como por razones de compadrazgo político, de utilización de la fuerza o desde una “posición de poder” económico, político o social, pequeños grupos oligárquicos se apoderaron de grandes extensiones de tierra, llegando algunos casos a sobrepasar la inmoral cifra de más de 5.000 hectáreas. Como ejemplo resaltante, por los años 20 ó 30 del siglo pasado se registra el caso de la familia Max Valladares, compadre del presidente de la República para entonces, Juan Vicente Gómez, el cual le dio en “concesión petrolera” más de la mitad del territorio nacional y luego el señor Max Valladares se las vendió a las transnacionales del petróleo al día siguiente de su obtención. La familia en cuestión de inmediato se radicó en Francia para siempre.

Es necesario agregar que el atributo sagrado, absoluto y supraconstitucional que la oligarquía y una parte de la clase media venezolana le

confiere a la propiedad privada, es debido al fetichismo y deidad que ella le confiere al “objeto propiedad”. *El fetiche propiedad*, cultural e ideológicamente desarrollado en algunos de los miembros de esta clase media disociada se origina en su cultura de la codicia, la avaricia, la ambición, el egoísmo, la egolatría y la usura. Ideológicamente están convencidos que la cosa propiedad le transfiere a su titular poder, dominio, libertad, mando, superioridad, y sobre todo ¡hegemonía!

Esta hegemonía que los pequeños grupos de poder oligárquicos definen como “poder establecido”, está refrendado por el estamento legal y leyes de sojuzgamiento que han aplicado consuetudinariamente sobre el colectivo, excluyendo y limitando el acceso legítimo de la mayoría de la población a la propiedad y sobre todo a la llamada propiedad colectiva, compuesta por elementos de propiedad social como son los recursos de la naturaleza, el agua, la tierra, el suelo, los espacios públicos, el transporte, los bienes del Estado, el aire, y las riquezas naturales en general, mediante los mecanismos perversos y alienantes del fetichismo de la propiedad, ya que la propiedad en el capitalismo es una herramienta de poder para lograr la explotación del hombre por el hombre; estableciendo por medio de la *propiedad* un sistema de relaciones, a la vez que la propiedad es una relación dentro del sistema de relaciones de producción, que convierte a la propiedad en una mercancía y por consecuencia en un medio de alienación para el ciudadano común o débil jurídico, económico y social al que se impone sobre él, excluyéndolo de los beneficios, bienestar y uso de este derecho humano, social e “inalienable”, mediante sistemas legales y económicos de acaparamiento y monopolio de los bienes privados, sociales y de producción por las minorías oligárquicas. Lo anterior nos conduce a traer a colación las definiciones más comunes de propiedad en la literatura jurídica donde una de ellas define a la propiedad como el derecho real de usar, gozar y disponer de las cosas, de las cuales se es propietario, sujeto a las restricciones impuestas por la ley y defendible por la acción reivindicatoria. Otra muy citada por los grupos oligárquicos expresa que “la propiedad

es una facultad que corresponde a una persona llamada propietario, de obtener directamente de una cosa determinada, toda la utilidad jurídica que esa cosa o bien es susceptible de proporcionar”. Otra definición muy invocada establece que “la propiedad es un derecho”. Esto significa, que al titular del derecho de propiedad le asiste un título jurídico. Es ese fenómeno concreto sobre el cual descansa y se le legitima el derecho que invoca el titular cuando, por perturbación o despojo, se lesiona su derecho.

En las anteriores definiciones encontramos puntos focales que inducen a la reflexión y el análisis. Ellas no analizan la legitimidad, legalidad o pertenencia del origen de la propiedad, si el título es ilícito, espurio o falso. Desde el momento de ser investida con un “título jurídico” la propiedad se transforma en impoluta y legítima, y mediante esa titularidad jurídica el propietario puede invocar cuando se trata de despojarlo de esa propiedad bastarda, la cual ha podido ser obtenida por medio del despojo a poseedores legítimos por el derecho natural y por tradición de posesión de la cosa. La titularidad de la propiedad privada al ser registrada en una Notaría Pública o Registro Civil adquiere por arte de birlibirloque la purificación y depuración de todos los elementos ilícitos o falsos que la constituyen. Las notarías públicas y los registros civiles vienen a ser el baptisterio donde se lavan todos los pecados originales concebidos de la propiedad privada. Desde hace muchos años existe el “lavado de propiedad” y la “legitimación de propiedad” al pasar por el tamiz de las notarías públicas o registros civiles. Parafraseando a Pablo Neruda en su libro *Residencia en la Tierra*, específicamente en su poema *Walking Around* el Poeta sintetiza en un verso toda la corrupción y vagabundería de las notarías al escribir: *¡Qué estupor causaría dejar caer en la mesa de un notario un lirio blanco!*

¿Cuántos títulos falsificados y negocios sucios han legitimado algunos notarios prevaricadores? Pero es el atavismo de las leyes y el orden jurídico establecido quien convierte a la propiedad privada en un fetiche de carácter absoluto y sagrado que no permite su evolución

dialéctica para adecuarla a las nuevas concepciones políticas, económicas y sociales producto de la razón y evolución de los nuevos valores axiológicos de la evolución de la humanidad.

Lo anterior nos conduce a analizar la forma más canalla, vil y aberrante sobre el derecho de propiedad que ha conocido la humanidad, como ha sido la *esclavitud*. La esclavitud es la forma suprema de la explotación del hombre por el hombre. El capitalismo es la forma más aberrante de la explotación del hombre por el hombre. Hay que resaltar que el “derecho de propiedad” de un esclavista o esclavizador sobre su esclavo, estaba legitimado con “títulos jurídicos” y respaldado por las leyes de esclavitud. La esclavitud propiamente dicha es la institución de un derecho que hace a un hombre dueño y propietario absoluto de otro hombre, o a este último propiedad del primero, del cual dispone de sus bienes y hasta de su vida. Si se le hubiese concedido un *valor absoluto, sagrado y supraconstitucional* a las leyes de esclavitud, no se hubiese podido liberar a estos ciudadanos, a estos seres humanos de ese desvarío diabólico y malvado que avergüenza y avergonzará por todos los siglos a la raza humana. Para ilustrar lo espurio y atroz de esta ignominia vamos a transcribir ese esperpento que fue la Real Cédula de su Majestad de 1789:

REAL CEDULA
DE SU Magestad
CONCEDIENDO LIBERTAD
PARA EL COMERCIO DE NEGROS
CON LAS ISLAS DE CUBA
Santo Domingo, Puerto Rico, y Provincia de
Caracas, á Españoles y Extranjeros, baxo
las reglas que se expresan.

Madrid

en la imprenta de la Viuda de Ibarra

MDCCLXXXIX

El rey

Para proporcionar á todos mis amados Vasallos, por cuantos medios son imaginables, las grandes utilidades que debe producir el fomento de la Agricultura, tuve á bien mandar examinar las varias proposiciones hechas para la introducción de Negros en las Islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, y Provincia de Caracas, á fin de acudir á la estrecha necesidad con que se hayan de estos brazos, sin los quales no pueden prosperar, y florecer, ni producir al Estado las inmensas riquezas, que ofrece su clima, y fertilidad de sus terrenos; y habiéndose tratado este gravísimo asunto con la reflexión que merece su importancia: He resuelto, en calidad de por ahora, que se haga este comercio baxo las reglas, y condiciones siguientes.

1

Todo Vasallo mío, avecindado, ó residente en España, ó Indias, podrá pasar en embarcación propia, ó fletada de su cuenta á comprar Negros á cualquier parage donde haya mercado, ó repuesto de ellos, llevando el dinero, y frutos que necesiten para su compra; y su introducción en dichas Islas, y Provincia de Caracas será libre de todas contribuciones; pero con expresa prohibición, de que los buques que salgan de dichas Colonias para hacer este comercio retornen otro ningún efecto comerciable, quedando por el propio hecho sujeto el mismo buque, y su carga á la pena de confiscación, y demás impuestas por Leyes del Reino á los contrabandistas: bien entendido, que constando por certificación del Administrador, ó Ministros de Real Hacienda, donde hayan introducidos los Negros, se devolverá hasta el importe de los derechos de su valor.

2

Para que á los que quieran hacer el citado comercio saliendo de los Puertos de esta Península les sirva de estímulo el no llevar sus buques vacíos, se les permitirá conducir carga de frutos, y géneros, é ir en derchura á los parages donde se han de proveer de dichos Negros, para después arribar con ellos, y con los géneros, y frutos á los Puertos por donde se permite la entrada; ó yendo con los frutos, y géneros á estos Puertos, salir desde ellos al comercio de Negros, y volver al mismo parage de su salida; y si no los pudieren vender allí, les será libre conducirlos á cualquiera otro de los habilitados para su introducción.

3

Se permitirá á los Extranjeros por tiempo preciso de dos años, contados desde la publicación en Indias de esta mi Real Cédula, conducir Negros á los Puertos habilitados con la misma expresa prohibición de llevar en sus buques otro efecto alguno comerciable, baxo las mismas penas que se imponen á los Españoles, y derogo para este sólo caso las Leyes de Indias, que prohíben la entrada, y comercio de los Extranjeros en los Puertos de aquellos mis Dominios; debiendo gozar la misma franquicia de derechos en la introducción de Negros que los Españoles; pero satisfarán los establecidos por la extracción de plata y frutos, que retornen, y provengan de sus ventas.

4

Los Españoles, y los Extrangeros, que por tiempo de dos años llevaren Negros á las expresadas Islas, y Provincia de Caracas para traficar con ellos, los podrán vender libremente á los precios que concierten con los compradores, sin que por parte del Ministerio Real, ni Municipal se les ponga tasa alguna: ni en este asunto tendrá más intervención, que la de estar á la mira para evitar el contrabando, y zelar que los Negros sean de buenas castas y calidades.

5

Tampoco se ha de hacer cargo á los Ministros Reales de los Negros que arribaren á los Puertos habilitados, ni pagarlos al pronto para des-

pués venderlos á quienes los necesiten; sino que han de quedar á cargo, cuenta, y riesgo de los que los conduzcan, ó hagan conducir para venderlos quando puedan, como otro cualquier efecto comerciable.

6

Los Negros han de ser de buenas castas, la tercera parte á lo más de hembras, y las otras dos varones; y no se permitirá la entrada, y venta de los que sean inútiles, contagiados, ó que padezcan enfermedades habituales, obligando á los que lleven alguno, ó algunos de esta clase á que los vuelvan á extraer.

7

Se gratificará por las Reales Caxas á razón de cuatro pesos por cada Negro á los Españoles que los introduzcan de buena calidad en los citados Puertos de su cuenta en embarcaciones Nacionales, para que sirvan de estímulo este comercio, y proporcionar por este medio la abundancia.

8

Como mi principal objeto para la concesión de libertades, exenciones, y gracias en este comercio se dirige á fomentar la Agricultura, declaro, que por cada Negro que no se destinare á ella, y á los trabajos de haciendas, ingenios, y otros usos campestres, sino al servicio doméstico de los habitantes en las Ciudades, Villas, y Pueblos, se ha de satisfacer la capitación anual de dos pesos desde el día de la publicación de esta mi Real Cédula, para modelar el exceso en esta parte, y concurrir al pago de las gratificaciones, que ha de satisfacer la Real Hacienda con arreglo á lo prevenido en el artículo antecedente.

9

Los Puertos de las Islas, y Provincia referidas por donde se ha de verificar la introducción de Negros, serán los siguientes: En la Provincia de Caracas, Puerto Cabello: en la Isla Española, Santo Domingo: en la de Puerto Rico, su Puerto; y en la de Cuba, el de la Habana; quedando

sólo habilitado el Puerto de Cuba para que puedan hacer por él el referido comercio los Españoles, excluyendo los Extranjeros.

10

Los buques Nacionales que se destinen para este tráfico, deben ser de un tamaño moderado, á fin de que puedan reconocerse con más facilidad; y los Extranjeros no podrán exceder de trescientas toneladas cada uno, ni entrar en los Puertos que no estén habilitados. Luego que unos, u otros den fondo, se ha de hacer el fondeo, al que deberá asistir como cabeza principal, un sujeto condecorado, de zelo conocido, desintereses, espíritu patriótico, é inclinado á proceder con exactitud, y desempeño por sí mismo, quedando este nombramiento á la elección de mi Secretario de Estado, y del Despacho de Guerra, y Hacienda de Indias, sin más incumbencia, ni encargo que este, y el de zelar, y examinar la buena calidad de los Negros que se introduzcan; El sujeto que se nombre tendrá cuidado de que se derramen las aguadas, poniendo en un Lanchón la pipería vacía, y sobre cubiertas las barricas de menestras, y carne, y repuestos de aparejo, y velas, para que se reconozca todo á satisfacción, pues con ningún motivo, ni pretexto se ha de poder conducir en dichos buques otra cosa que los víveres, aguada, y precisos repuestos para navegar correspondientes á su tamaño, baxo la pena de comiso del buque, y de toda su carga, incluso los Negros; pero de esta regla se excetuaran las embarcaciones que salgan de los Puertos habilitados de España, las cuales podrán llevar géneros y frutos según se previene en el artículo segundo, y han de ser tratadas como cualquiera otro Navío de Comercio.

11

Las embarcaciones extranjeras que vayan con Negros, sólo se detendrán en los Puertos el tiempo preciso para darles salida, pues los compradores deberán efectuar la venta al mismo tiempo que los reciban, y á lo más tarde á las veinte y cuatro horas, prohibiendo que pueda internarse en el País, ni quedar Apoderado que no sea vecino de él, los cuales estarán sujetos á todas las providencias que se tomen por

el Gobernador, y Gefes de Real Hacienda, para evitar el fraude en las Embarcaciones; y para el debido cumplimiento quedará hecho cargo el sujeto que se nombre para la particular inspección de este Comercio.

12

Finalmente siendo mi Real Voluntad procurar á todos mis Vasayos las mayores ventajas en este Comercio, y aumentar el número de Agricultores en las Colonias de América para la prosperidad de sus habitantes; encargo muy particularmente á los sujetos que han de nombrarse para intervenir en este Ramo, y á los Gobernadores, é Intendentes, que no sólo concurran con las providencias que les dicte su zelo para evitar que el abuso de estas gracias obligue á revocarlas sino que me expongan y representen quanto la experiencia les manifieste ser preciso para lograr el mayor beneficio, y utilidades de mis Vasallos, y consiguientemente de la prosperidad, y aumento del Comercio.

Y para que tengan el debido cumplimiento las gracias especificadas en los doce Artículos anteriores, derogo todas las Leyes, Cédulas, y Reales Órdenes que se opongan, ó sean contrarias á ellos, y mando á mi Consejo Supremo de Indias, Virreyes, Presidentes, Gobernadores, é Intendentes, Justicias, Ministros de mi Real Hacienda, y á qualesquieran Tribunales á quienes corresponda, ó pueda corresponder, que guarden, cumplan, hagan guardar, cumplir, y executar quanto en esta mi Real Cédula se previene. Dada en Madrid á veinte y ocho de Febrero de mil setecientos ochenta y nueve. YO EL REY

Al leer el texto anterior “si usted no es capaz de temblar de indignación” como dijo el comandante Ché Guevara, en su carta a la compañera homónima, entonces usted no es ¡un ser humano! Cuando se habla de la esclavitud y del marco legal que la institucionalizó, el estupor llega a niveles de desvaríos. Es inconcebible que la condición humana haya llegado a esos niveles de ultraje a la razón y a la naturaleza del hombre. El texto establece la licencia de “comprar negros donde haya mercado, o repuestos de ellos”, también establece que “los pueden ven-

der”. En el Inciso 4 se lee “que pueden traficar con ellos. Los podrán vender libremente a precios que él concierne con los compradores” “gratificarán con cuatro pesos por la *caza* de negros de *buena calidad*”. Es decir, los elementos fundamentales del capitalismo y de las leyes del mercado están contenidos en esta ley (Real Cédula de su Majestad del Rey de España de 1789, o Ley de esclavitud que consagra la propiedad privada del esclavo), y en ella el ser humano estaba considerado un producto, una mercancía, por lo cual, otro ser humano semejante a él se apropiaba por la fuerza o y lo cosifica, lo despojaba de su condición de ciudadano y lo convierte en producto del libre mercado o del libre juego de la oferta y demanda.

La oligarquía de esa época, es decir, los esclavistas, eran minoría y por esas trapisondas legales y sofismas jurídicos que la sociedad opresora llama “el imperio de la ley”, expresaban que ellos siempre actuaban ajustados a “derecho” y en absoluta legalidad. Hay que reiterar que la institución de la esclavitud establece el derecho que un hombre sea dueño absoluto de otro hombre y está legitimado por título jurídico. La esclavitud es un derecho que establece la propiedad privada de un ser humano por otro semejante. Esta “propiedad privada” llamada esclavo, tiene los mismos requisitos, atributos y elementos que caracteriza el derecho de propiedad privada en nuestra legislación actual como: 1- El derecho de *uso*, 2-el derecho de *goce*, 3-el derecho o facultad de *disposición*.

El derecho o atributo de la propiedad privada en la legislación actual significa que un propietario puede vender el bien sin que nadie se oponga. También la puede regalar sin que nadie proteste y llegar a los extremos de *destruir* la propiedad sin que nadie sienta el derecho de prohibírselo. Podemos establecer con absoluta precisión una analogía, un paralelismo entre el derecho de esclavitud de siglos anteriores y el derecho de propiedad privada de nuestros días. En nuestra historia pasada y reciente existen asaces ejemplos de lo pernicioso de la invocación del derecho de disposición de la propiedad privada para

actos aberrantes, donde el bien o propiedad por un mal entendido del derecho del atributo “*disposición*” se llega al desvarío, la malignidad y el daño individual y colectivo invocando el atributo de disposición. ¿Cuántos respetables industriales botan la leche al río en ingentes cantidades para mantener los altos precios de mercado sin importarles la necesidad de alimento de miles de niños? Pero... ¡Son estrategias de mercado y actos lícitamente mercantiles! Tomemos como caso el impactante ejemplo del famoso pintor y muralista mejicano Diego Rivera, quien nació en la ciudad de Guanajuato, el 8 de Diciembre de 1886. La expansión de su fama llevó a Rivera durante la década de los años 30 a exponer su pintura en Nueva York. Fue la época más controversial en la carrera de Diego Rivera y en ella ocurrió el famoso incidente con el capitalista e industrial John D. Rockefeller Jr., quien lo contrató para pintar un mural en el vestíbulo de entrada o lobby del edificio RCA en la ciudad de Nueva York. El edificio, no sólo era uno de los más famosos edificios del mundo, sino también era el edificio principal de un conjunto de edificios que componían lo que se llama “The Rockefeller Center”. Por consiguiente, el Centro Rockefeller se había convertido en un símbolo del mercado capitalista. Diego Rivera, había diseñado un mural titulado, “El hombre en una encrucijada”. El mural, mientras Rivera lo estaba pintando, había sido elogiado por los críticos del arte mundial como una obra maestra. Pero, hacia el final, cuando Rivera estaba cerca de completarlo, incluyó un retrato de Lenin. La reacción de la prensa y la controversia que suscitó el retrato fue inmediata y vociferada en toda la prensa. Rockefeller, vio el retrato como un insulto personal y mandó a cubrir el mural y más tarde ordenó que fuera destruido. El hecho es de que Mister Rockefeller como *pagó o mandó* a construir el mural, y esto le transfiere todos los derechos de propiedad sobre el bien, incluyendo el atributo de propiedad como la disposición, esto quiere decir la disposición de venderlo, usufructuarlo y hasta llegar al extremo de destruir la propiedad o bien que “jurídica y legalmente” según el estamento legal le pertenece, mandó a destruir el mural. Este ejemplo ilustran cabalmente

que distorsionado y absurdo resulta este atributo de la propiedad que históricamente se ha mantenido inmutable por siglos. El creador y ejecutor de la obra, el verdadero hacedor del bien, que por su magnitud y valor artístico pertenece a la humanidad, ¡No! No es el dueño del bien, ya que por el hecho crematístico y las distorsiones de los atributos de propiedad, un aberrado, un sátrapa capitalista lo destruye impunemente, y a él lo protege la ley.

La propiedad innata

Meditando sobre los hechos anteriores, observamos que la esencia y sustrato del concepto de la propiedad en la actualidad, conlleva en formas ocultas y subrepticias dentro de los laberintos legales y de la Malla económica de la producción de bienes y servicios un gran pillaje y despojo a los verdaderos creadores y hacedores de la riqueza. Generalmente son las manos de los obreros y trabajadores los creadores de bienes y servicios que produce la sociedad para su subsistencia y manos ocultas amparadas por la legalidad se apropian del trabajo y esfuerzo creador que generan las fuerzas productivas mediante la fuerza de trabajo. Un ejemplo ilustrativo lo hemos comprobado cuando fuimos testigos presenciales de la construcción de una edificación que luego fue vendida en propiedad horizontal. Observamos todo el proceso y fuimos testigos como los obreros comenzaban su faena extenuante de trabajo desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde. En conversaciones directas con algunos de ellos nos informaron que le pagaban por su labor Bs. 40 por día y que al mes le representaba Bs. 800. Estamos hablando del año 1973. El dueño del terreno y de la construcción era un militar de mediano rango que solamente hizo presencia en la obra en dos oportunidades durante una hora para inspeccionar. Los trabajadores de la construcción concluyeron la edificación en seis meses, es decir, ellos acumularon Bs. 4.800 cada uno de los 12 obreros en el medio año de trabajo. Los 40 apartamentos del edificio fueron

vendidos en Bs. 130.000 cada uno, y según análisis de cálculo y confesiones del propietario cada apartamento le produjo Bs. 52.000 de ganancias netas. Lo que indica que el propietario del edificio que no lo construyó, que no hizo ningún esfuerzo físico ni mental para producir este bien habitacional, se “ganó” o se apropió de Bs. 2.080.000 por los 40 apartamentos. Ahora bien ¿de dónde sacó el dinero para comprar la parcela sobre la cual se erigió el edificio, y el capital para construir? Con el sueldo de un militar de medio rango que para 1975 pudiera estar por los Bs. 2000 ¿puede acumular dinero para este bien? ¿Pueden los obreros de la construcción obteniendo por seis meses de trabajo Bs. 4800 comprar un apartamento que el mismo hizo, que el mismo lo construyó? Los obreros seguirán viviendo en sus ranchos en las zonas populares y construyendo bienes o mejor dicho riqueza hasta el fin de sus días.

Las situaciones presentadas anteriormente nos hacen cavilar y profundizar aún más sobre el tema de la propiedad privada, y establecer en las categorías de la propiedad el concepto de la “*propiedad innata*” ¿qué es la propiedad innata? Es un conjunto de propiedades que todo ser humano trae consigo en el momento de nacer y le son inherentes e inalienables, no se pueden separar del individuo de por vida, como la vida misma, su fuerza de trabajo, su sistema óseo, su sistema muscular, su intelecto, los derechos sociales y humano que la sociedad le confiere a todo ciudadano al nacer y formar parte de ella, entre otros derechos innatos. ¿Porqué son inherentes?, porque están anastomosados y fundidos a su condición física y anatómica y por su naturaleza no se puede separar; pongamos por caso la fuerza de trabajo, el sistema muscular de todo ser humano está fusionado a él en forma indeleble, consustanciado. Cómo podemos separar de una persona su sistema muscular ¡imposible! Cuando ese sistema muscular o fuerza de trabajo interviene en el proceso de producción formando parte de las fuerzas productivas constituidas por la fuerza de trabajo y los medios de producción, el individuo participa en ese proceso de producción *involucrándose* en la generación de riqueza, es decir, en el

proceso de creación de bienes o servicios. Una cosa es involucrarse y otra cosa es estar comprometido o ser partícipe de algo. Es muy conocida la moraleja de la tortilla de cochino, donde se establece que el cochino está involucrado en la tortilla y la gallina está comprometida. Esto significa que el cochino pone parte de su cuerpo, de su sistema muscular, se desprende de una parte físico-biológica de su anatomía y de su existencia, e inclusive es necesario la muerte para que una parte de su cuerpo sea convertida en jamón y forme parte de la tortilla; en cambio la estructura física de la gallina no se altera ni se menoscaba, ella pone el huevo que físicamente está separado de su existencia, es decir, lo pone y se va. Igual ocurre con la fuerza de trabajo del obrero cuando él se involucra en el proceso de producción. Su fuerza de trabajo se va diezmando, consumiendo, es un acto de “consunción” donde poco a poco se agota esta fuerza de energía o trabajo. Cosa distinta es una herramienta de trabajo como un martillo, un hacha etc. En el ejemplo del capitalista que pone la parcela y los recursos, éste no está involucrado en el proceso de producción del edificio, el a lo máximo está comprometido con el capital que supuestamente ha sido mal habido, pero sí se apropia del “valor o capital” creado y generado por el trabajador mediante su fuerza de trabajo, es decir, mediante su entidad existencial, una parte de la existencia de este ser humano quedó involucrada en la edificación y por esas galimatías de la economía capitalista se crea un despojo del valor de trabajo o plusvalía al obrero. El obrero es el primero en el trabajo y el último en la vida. El capitalista va a su riqueza y el obrero va a su pobreza, por lo tanto la propiedad tiene que ser cuestionada y revisada en un sistema socialista, y tomar muy en cuenta la “propiedad innata” al establecer las diferentes y novedosas categorías de propiedad privada.

Si unimos estos desvaríos a lo aberrante de la esclavitud, que era un derecho de propiedad, empecemos a cuestionar y desarrollar nuevas doctrinas jurídicas que actualicen el derecho de propiedad y las nuevas formas de propiedad en el Estado Socialista.

El derecho de esclavitud fue abolido en Venezuela por el presidente José Gregorio Monagas el 24 de marzo 1854, por ser un esperpento jurídico, un acto vil y horrendo que mancillaba la conciencia del hombre y a su naturaleza humana. Es difícil encontrar hoy en día una persona que esté en sus cabales que pueda defender, justificar o avalar este acto de barbarie. Sin embargo, mucha gente de la época se opuso tenazmente a la abolición de la esclavitud, pedían indemnizar a los esclavistas para que liberaran sus esclavos. Veamos esta reseña de los acontecimientos que se escenificaron en Caracas al día siguiente del decreto de abolición de la esclavitud: “...La sanción de esta ley suscitó disturbios en Caracas. Había sido costumbre que las esclavas de las familias distinguidas siguiesen a sus amas llevando la alfombra sobre la cual éstas se arrodillaban en el templo durante los oficios religiosos. El domingo 26 de marzo de 1854, inmediatamente el día siguiente a la promulgación de la ley de la abolición, algunas de las mujeres cuya libertad había sido decretada y que continuaron trabajando como sirvientas en las casas donde hasta el día 24 habían sido esclavas, salieron como de costumbre a la calle detrás de sus señoras, cargándoles la alfombra en el trayecto hacia la iglesia, grupos de hombres, mujeres y muchachos reunidos en las cercanías de los templos, decía un periódico, «...han tenido la osadía de embestir a las sirvientas, arrebatárles las alfombras, tirarlas a los tejados, arrojárseles a la cara a las señoras, en algunos casos, y en otros destrozarlas y repartir sus pedazos entre la multitud desordenada...». Todo esto se llevó a cabo a los gritos de «Abajo las alfombras!». Algunos parientes de las señoras irrespetadas acudieron en su defensa y estallaron peleas. Fue necesario que un hijo del presidente, el joven José Gregorio Monagas Marrero, saliese a la calle a la cabeza de algunos oficiales y soldados para apaciguar los ánimos, lo cual se logró”. Esto ilustra cuánto hay de absurdo y falaz en el concepto o criterio sobre la inmutabilidad de las leyes, otorgándoles atributos anacrónicos de imperturbable inalterabilidad y no susceptibles de modificaciones a este derecho conocido secularmente a lo largo de la historia, como la propiedad privada. Analizando esas posiciones y criterios, sólo lo podemos explicar mediante ¡El fetichismo de la propiedad!

La propiedad entendida como un proceso de relación entre los hombres, ella debe responder a dinámicas de cambios y rediseños para adaptarla a los nuevos paradigmas y axiomas sociales de los nuevos sistemas de organización social y de los nuevos modos de producción de bienes y servicios en función colectiva para beneficios de los individuos o ciudadano. Esta exclusión del derecho de propiedad y sobre todo de la propiedad privada y la propiedad de los medios de producción, convierten a grandes grupos de la sociedad en excluidos y por lo tanto disminuidos social, política y económicamente ante grupos minoritarios que secularmente en el discurrir de la historia han venido estableciendo una tiránica hegemonía. Esta ubérrima masa de población que en Venezuela alcanza aproximadamente un 80% de de los habitantes, ha recibido en los últimos ocho años, protección y defensa expedita por parte del Estado y del Gobierno. Lo anterior trae a colación analizar el sustrato de fondo de la diatriba entre el gobierno, la mayoría socialista y la oligarquía neoliberal; la oposición pretende engañar a los venezolanos diciendo que se trata de un debate ideológico, que sin duda lo es, pero la escaramuza fundamental es que se trata de una lucha de poder entre el Estado y el Mercado. Es falso el planteamiento de la oligarquía financiera y política, tratar de establecer que lo planteado en la controversia actual es una lucha entre el Estado Socialista y los ciudadanos venezolanos, desde luego, la lucha es entre socialismo y capitalismo, pero la confrontación también es entre el Mercado y el Estado Socialista constituido por el Gobierno y el Pueblo ¿Qué es el Estado en un sistema socialista? Sencillamente es el pueblo, el colectivo, hecho Gobierno y donde las relaciones de producción establecen un sistema de propiedad fundamentalmente colectivo; ¿Qué es el Estado Capitalista? Es la minoría oligárquica, excluyente y la razón básica de su acción es la lógica de la explotación del hombre por el hombre (variaciones de la neoesclavitud) a través de la mano invisible del mercado. Es la usura, el agiotismo, la explotación de unos pocos a una gran mayoría con el sofisma del libre juego de la oferta y la demanda; y con estas argucias le chupan la sangre a los ciu-

dadanos y lo someten política, social y económicamente, conculcando todos los derechos de la mayoría de la población, atribuyéndose para ellos todos los derechos “sustentados” ¡eso sí! con títulos jurídicos, que le acreditan la propiedad privada, la propiedad de los medios de producción, y haciéndose extensivamente propietarios, derogando y aboliendo todo los derechos de la mayoría al asumir para ellos todos los privilegios de uso y propiedad, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a las riquezas de la nación, etc. Lo anterior nos hace redefinir el concepto real del mercado en el neoliberalismo, ya que no se trata de una simple relación lógica de la oferta y la demanda sino de una herramienta de poder y de subyugación. El mercado y los mecanismos perversos de la oferta y la demanda son instrumentos de esa maquinaria de dominio social, político y económico mediante el cual se somete al ciudadano. Por eso el Estado Socialista actúa y sale en defensa de estos inermes grupos sociales. Por lo anterior es que observamos a la oposición oligárquica lanzar todas sus fuerzas para mantener el status quo de su sistema capitalista, y sostener férreamente el principio de la descentralización ¿qué busca la oposición venezolana al defender la descentralización? ¡Lo que busca es debilitar el Estado! ¡Divide y vencerás! La falsa argumentación de que el Centralismo Federal es pernicioso e inoperante, lo que busca con ese sofisma es tratar de minimizar al Estado para debilitarlo y destruirlo, porque un estado fuerte y socialista es el fin de sus privilegios, rapiña y exclusión. Y esta es la lucha planteada, un estado socialista fuerte, que actúe como garante y defensor del poder popular y una oposición oligárquica tratando de aferrarse a ese eufemismo conocido como las leyes del mercado, como expresión de ese capitalismo salvaje y neoliberal mediante el cual, por siglos y siglos, han usufructuado mediante tretas jurídicas, asaces beneficios y privilegios.

Lo anterior, entre otros elementos es una de las razones para proponer un cambio o desarrollo a una parte del articulado de la Constitución Bolivariana de Venezuela.

El concepto “propiedad” en el capitalismo salvaje y explotador, y pudiéramos agregar, en el sistema del libre mercado y del libre juego de la oferta y la demanda, no es igual al concepto de “propiedad” dentro del socialismo, donde se prioriza y privilegia el interés y el beneficio colectivo sobre el interés y beneficio individual. Dentro de la dialéctica social, las contradicciones entre individualidad y colectivismo se desarrollan dentro de la dinámica del bien común o del interés social. Pero ¿Qué es el interés social? Es un concepto político y sociológico que hoy está investido de jurisprudencia, ya que el Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela legisló en enero de 2002 sobre el caso y dictaminó en sentencia firme que un estado social de derecho lleva implícito el concepto de “interés social” y este está ligado a la protección de determinados grupos de la población del país, generalmente mayoritarios, a quienes se le reconoce que están en desigualdad de condiciones con otra persona con quien se relacionan y por lo tanto las defiende para evitar que esta condición de desigualdad jurídica-económica-social en que se encuentran, actúe en menoscabo sobre ellos y se le cause daño jurídico, social o económico; y es por ello que esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Socialista Venezolano pone en igualdad de condiciones al débil jurídico, al débil social y al débil económico y es la base fundamental de la economía social y es la base de la economía productiva bajo el criterio del trabajo reproductor y reproductivo y no de la explotación, la especulación y la usura. Es la lógica de la economía en función social.

Pero por otra parte resulta que la fuerza telúrica de los pueblos rompe con los estamentos opresores mediante la dinámica dialéctica de la conciencia y de sus luchas, y hoy nos encontramos en Venezuela con un proceso revolucionario en marcha, que ha traído para justicia y bienestar de las grandes mayorías un cambio de sistema, tanto en la base social, en la estructura social y en las relaciones de producción que determinan un nuevo marco jurídico; y como quiera que el concepto propiedad no se trata de un derecho absoluto, el Gobierno Revolucionario

nario, el nuevo Estado Socialista y el Soberano, es decir, el pueblo están redimensionando estos criterios, impulsando nuevas formas de uso, tenencia, posesión y valor del derecho a la propiedad privada, ampliando su espectro en función de la justicia social y de la justa distribución de la riqueza establecido taxativamente en los artículos 112 y 299 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.

Hoy por hoy, en Venezuela, el concepto y definición de propiedad privada se ha democratizado en base al uso y necesidad del colectivo, en función a la incorporación de los llamados derechos de tercera generación o “derechos difusos y colectivos” que mantenían en el exilio de la propiedad privada a la gran mayoría del gentilicio venezolano. Hay que tomar en cuenta que el crecimiento de estos derechos humanos no ha cesado todavía, su importancia y tendencia a nivel universal es cada vez de mayor contundencia debido al desarrollo de la conciencia de los pueblos. Recientemente una nueva categoría de derechos sobre la propiedad, al igual que otros derechos como los derechos sociales, económicos, culturales, de justicia, de solidaridad humana, a la riqueza colectiva de los pueblos, del uso y disfrute por los ciudadanos de los elementos naturales como el agua, la tierra, la vivienda, el ambiente, elementos vitales de subsistencia, entre otros, hace que se requiera de la acción solidaria y concertada de todos los estamentos sociales, en especial con los ciudadanos mas desposeídos de los grupos sociales, de los grupos comunitarios, y fundamentalmente del Estado y del Gobierno.

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre en su artículo 17 primera parte dice: “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectiva”; por eso el colectivo venezolano, el pueblo en su evolución y toma de conciencia para profundizar la revolución y ampliar el marco de justicia y bienestar de sus ciudadanos, ha propuesto abrir el debate sobre el estamento legal actual sobre la propiedad establecida en el artículo 115 de la Constitución Bolivariana “para construir un nuevo orden con preeminencia del ser social colectivo, y para ello es necesario superar los obstáculos generados por las relaciones sociales

capitalistas, manifestados en la imposición de los intereses de la minoría por encima de los intereses del poder originario, y *la concentración de la propiedad en pocas manos*. La dificultad política para democratizar el poder, una institucionalidad que propicia el establecimiento de un cuerpo burocrático amparado en una superestructura ideológica que mantiene a nuestro pueblo encadenado a la miseria, alienado y alejado de su propia realidad. Estas estructuras de poder se fundamentan en la imposición de un saber que les garantiza la supremacía y dominación a través del control de las ideologías, la cultura, la educación y de los medios de comunicación. Romper y confrontar a este poder pasa necesariamente por avanzar a través del instrumento más contundente que tenemos como es nuestra Constitución Bolivariana. En función de lo anterior y motivados por el deseo de profundizar el proceso dialéctico que conlleva a la democracia participativa y protagónica; interactuando, conociendo y decidiendo de manera conjunta desde el poder popular de manera vinculante hacia el poder constituido, por lo tanto consideramos oportuno y pertinente continuar con el proceso de debate y análisis. Es necesario comenzar a polemizar y confrontar en todos los escenarios sobre los nuevos paradigmas y criterios de las nuevas formas de propiedad identificados con una evolución de justicia y equidad de la razón social y humana y así sentar las bases para la construcción de un nuevo modo de producción fundamentado en nuevas relaciones de producción, nuevas formas de propiedad, con una democratización del capital que permita el control del poder popular en la producción y la distribución de los bienes y servicios, con la inclusión del derecho fáctico de la propiedad social de todos los venezolanos y venezolanas, como forma de distribuir la riqueza colectiva de la nación incluyendo, en el proceso productivo a todos los sectores del país, haciendo uso razonable de los recursos naturales. Ya se ha puesto en la palestra del imaginario colectivo *nuevas ideas* y nuevas formas de propiedad como la propiedad mixta y la propiedad social en un socialismo con nuestras particularidades, o el modelo de economía mixta que ya se inició

en nuestras comunidades y ese debate ahora es cuando comienza y hay que desarrollarlo y profundizarlo, donde no se niega la propiedad privada, siempre y cuando la propiedad privada esté en función social y no para explotar y empobrecer a lo demás y con una nueva cultura empresarial, que trabaje honestamente, que se interese de lleno al trabajo, junto con el Estado y los trabajadores, con una propiedad social de los medios de producción estratégico a través del Estado. También se debe continuar y profundizar el debate que promueva otras formas de propiedad, como son las *colectiva*, *la estatal* y *la mixta*. El debate está latente en la conciencia del soberano y ya se ha instalado en el colectivo y nadie podrá detener la marcha de la historia.

Ya se presentó una propuesta que su contenido está anidado en el ser social que constituye la mayoría del gentilicio venezolano. En ella se reconocen y garantizan las diferentes formas de propiedad. La propiedad pública que es aquella que pertenece a los entes del Estado; la propiedad social que es aquella que pertenece al pueblo en su conjunto y a las futuras generaciones, y podrá ser de dos tipos: la propiedad social indirecta, cuando es ejercida por el Estado a nombre la comunidad, y la propiedad social directa, cuando el Estado la asigna, bajo distintas formas y en ámbitos territoriales demarcados, a una o varias comunidades, a una o varias comunas, constituyéndose así en propiedad comunal, o a una o varias ciudades, constituyéndose así en propiedad ciudadana; la propiedad mixta es la conformada entre el sector público, el sector social, el sector colectivo y el sector privado, en distintas combinaciones, para el aprovechamiento de recursos o ejecución de actividades, siempre sometida al respeto absoluto de la soberanía económica y social de la nación; y la propiedad privada es aquella que pertenece a personas naturales o jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso y consumo, y medios de producción legítimamente adquiridos con los atributos de uso, goce y disposición y las limitaciones y restricciones que establece la ley. Igualmente toda propiedad, estará sometida a las contribuciones, cargas, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de

utilidad pública o de interés general. Por causa de utilidad pública o de interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes, sin perjuicio de la facultad de los Órganos del Estado, de ocupar previamente, durante el proceso judicial, los bienes objeto de la expropiación, conforme a los requisitos establecidos en la ley.

Esta propuesta de modificar el artículo 115 de la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ya fue presentada al colectivo el año 2007 para sincerar y ampliar el espectro de la propiedad y está instalada desde hace mucho tiempo en el que hacer de la actividad económica y jurídica, formando parte de la cotidianidad de los venezolanos. La Constitución de la Cuarta República promulgada el 23 de Enero de 1961 en su artículo 99 dice: “se garantiza el derecho de propiedad. En virtud de su función social la propiedad estará sometida a las contribuciones, “*restricciones*” y obligaciones que establezca la ley con fines de “*utilidad pública o de interés general*”. Es necesario hacer notar que esa constitución fue elaborada en un conciliábulo de 174 parlamentarios entre diputados y senadores, en su mayoría adecos y copeyanos en el más puro arcano; donde no tuvo participación ni conocimiento el pueblo venezolano. Como detalle de lo tramposo y timador que era el propósito de la elaboración de esa Constitución de espalda al pueblo, su promulgación fue hecha el 23 de enero de 1961 en la mañana, y ese mismo día en la noche en cadena nacional el presidente Rómulo Betancourt suspende las garantías constitucionales que luego se prolongó por muchos meses. Otro detalle importante que define lo pernicioso y repugnante de ese desdichado período de la historia política nacional lo constituye un acto bochornoso que produjo el repudio nacional cuando en las elecciones de 1972 se estructura un partido político constituido por miembros de la corriente perejimenista llamado Cruzada Cívica Nacionalista que postuló como senador por el Distrito Federal al exdictador Marcos Pérez Jiménez que arrasó en la elecciones y doblegó a los candidatos adecos postulados para senadores, entre los

cuales figuraba el ¡*conspicuo!* David Morales Bello, y para conjurar la investidura como senador por el pueblo caraqueño del exdictador, el mismo David Morales Bello buscó la argucia jurídica de hacerle una enmienda a la constitución vigente, y fue así como el día 9 de mayo de 1973 se consuma ese esperpento jurídico de la Enmienda Número 1 de La Constitución del año 61 que en su artículo 1 dice: “Se introduce una enmienda a la Constitución, que llevará el número uno, redactada así:

“No podrán ser elegidos Presidente de la República, Senador o diputados al Congreso, ni Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quienes hayan sido condenados mediante sentencia definitivamente firme, dictada por Tribunales Ordinarios, a pena de presidio o prisión superior de tres años por delitos cometidos en el desempeño de funciones públicas, o como ocasión de éstas...”.

Para cualquier venezolano, independientemente de su posición política, este adefesio jurídico-político elaborado en el cónclave del comité nacional de acción democrática (CDN) constituido por 15 miembros, especie de Sanedrín que dictaba a su antojo y de espalda al soberano, decisiones políticas, económicas y sociales en un ejercicio de dictadura constitucional que contrasta abruptamente con el ejercicio y praxis de la política de consulta permanente y amplia al pueblo venezolano de todos los actos de la Revolución Bolivariana. Hagamos un ejercicio de análisis comparativo entre este proceder de “cogollo partidista” que dejaba en un exiguo grupo de 15 maleantes políticos todas las decisiones del país. La actual Constitución Bolivariana de la República de Venezuela aprobada el 15 de diciembre de 1999 fue discutida públicamente y a través de todos los medios de comunicación audiovisuales e impresos. Ningún venezolano estuvo ajeno o desinformado de los planteamientos y contenidos que se discutían en la Asamblea Nacional. Luego, como caso único en América y en muy pocos países del mundo (creo que sólo existen en la actualidad dos países) se sometió a la consulta popular, y el pueblo soberano, en elecciones libérrimas y secretas aprobó con un 73% su contenido.

Siguiendo con el ejercicio de analogía comparada, contrastemos la propuesta pública y notoria que presentó el presidente Hugo Rafael Chávez Frías al país el 2007 para reformar algunos artículos de la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y para ello observemos algunas cifras: se realizaron más de 5.500 encuentros con diferentes sectores del país debatiendo su contenido, se imprimieron más de un millón y medio de ejemplares que fueron difundidos en todo el ámbito nacional, se recibieron en la Asamblea Nacional a “todos” los sectores sociales, políticos, económicos, comunitarios, etc. para escuchar sus inquietudes, posiciones y propuestas. La discusión del articulado fue transmitida cabalmente al país por todos los sistemas de comunicación, desde la comunicación directa, persona a persona, grupo a grupo, hasta la de los medios masivos de comunicación. Página Web, línea 800, etc. ¿Puede haber un sector o alguien en particular que aviesamente manifieste que no fue informado del contenido de esta Reforma? ¿Puede alguien alegar que no se le dio la oportunidad de ser escuchado? ¡Sólo un estúpido estructural y confeso puede sostener inmensa falsedad! Contrastemos estas dos fórmulas de actividad política y saquemos conclusiones. Comparemos cómo se hizo la Constitución de la Cuarta República del año 1961 y como se elaboró la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de de 1999. ¿Cómo fue planteado al país el cambio de algunos artículos de la Constitución Bolivariana de Venezuela? Ahora analicemos los cambios que fueron propuestos al artículo 115 de la actual Constitución. Observamos que el concepto propiedad establecido en el artículo 99 de la constitución del año 1961 dice: “se garantiza el derecho de propiedad”... en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 99 el artículo 115 dice: “se garantiza el derecho de propiedad”... y en la propuesta de Reforma del mismo artículo se amplía el concepto de propiedad al proponerlo de la forma siguiente: “*se reconocen y garantizan las diferentes formas de propiedad*”... la propiedad pública, la propiedad social, la propiedad

social indirecta, la propiedad social directa, la propiedad comunal, la propiedad ciudadana, la propiedad colectiva y la propiedad mixta.

El colectivo venezolano viene participando activamente en estas diferentes cualidades o diferentes formas de propiedad. Entendemos que la “propiedad colectiva” es la que pertenece a grupos sociales o personas, para su aprovechamiento, uso o goce en común, pudiendo ser de origen social o de origen privado. ¿Qué son los espacios públicos? ¿Qué son las vías de tránsito como las calles, carreteras o autopistas? ¿Qué es por ejemplo el Paseo de los Próceres? Y así, todo espacio, bienes y servicios de interés social y colectivo, debe ser de propiedad social. Como las playas, los ríos, las montañas, los espacios marinos, el transporte colectivo, etc. Cómo se puede justificar que en un hotel del litoral central unos pocos señores calificados de inversionistas se apropien ilegítimamente de una extensión de playa para “privatizarla” para uso exclusivo de su hotel. Aquí aplica el criterio de la propiedad colectiva, es decir, esta extensión de playa pertenece al colectivo y no puede generar exclusión del usuario venezolano. Para refrescar la memoria del lector, hay que recordar que en el año 1974 recién asumido el poder por Carlos Andrés Pérez, hubo que promulgar un decreto para “expropiar” a un grupo muy grande de oligarcas que se “*apropiaron*”, léase bien, se apropiaron de todas las playas y cayos del Parque Nacional Morrocoy. Estos oligarcas venezolanos de buen apellido, de abolengo y estirpe, se robaron, se tomaron por la fuerza, la totalidad de las playas del Parque Morrocoy construyendo ilegalmente casas o palafitos, no permitiendo que los venezolanos usufructuaran esas playas que eran propiedad de la Nación o de “propiedad colectiva” de todos los compatriotas. Es importante acotar que hubo que usar la figura jurídica de “expropiación” para tumbar todas esas casas y palafitos construidas sin ninguna legalidad, propiedad ni permisología, pero sí con la anuencia y protección del gobierno de turno representante y gestor de la oligarquía y del sistema político.

Lo anterior ilustra una de las grandes falacias de la propiedad privada que ha sido señalada anteriormente y consiste que una vez que la propiedad es “legalizada” de hecho o apropiada ilegalmente y luego registrada en Notarías o Registros Públicos se convierte en impoluta y se depura de toda mancha o ilegalidad. Es lo que hoy en día se califica como el “lavado de la propiedad” o “legitimación de la propiedad”. Otro caso emblemático fue el de Los Roques, donde la oligarquía financiera se apropió construyendo mansiones y reservándose playas para su uso personal. Como detalle resaltante de como actúa la oligarquía y como ella está convencida que es la dueña del país y de todo lo que se le antoje, en el Parque Nacional Morrocoy existe un cayo llamado “Cayo Pelón” y todo el cayo fue tomado y cercado por una persona donde construyó una mansión y para desalojarlo hubo que emplear a la Guardia Nacional y utilizar las armas.

La función social de la propiedad

Lo anterior viene a reforzar la importancia de constitucionalizar la propiedad colectiva y la propiedad social. La avaricia y codicia de los grupos oligárquicos por monopolizar todo tipo de propiedad y sobre todo la propiedad social hace que el colectivo venezolano, es decir, el pueblo, que en su gran mayoría ha sido secularmente impedido de acceder a los bienes que les pertenece porque son del Estado y deben pertenecer por igual a todos sus ciudadanos para el uso y disfrute sin restricciones algunas, como es el caso de las playas, ríos, lugares de esparcimiento y todo espacio de propiedad pública.

En la “doctrina” sobre justicia social y en los “análisis filosóficos” sobre el tema, se establece el grado de importancia y significación para la organización social que existe entre la implementación de políticas sociales, políticas de justicia social, para precisar el interés social y el interés común, y actuar sobre los derechos colectivos y difusos del ciudadano y desarrollar estrategias de construcción y consolidación del Poder Político constituido

como genuino aliado del Poder Popular y del Poder Comunitario, es decir, establecer una vinculación entre política y políticas sociales, y a su vez, producir una serie de acciones sociales y políticas por las cuales esas estrategias se articulen con la necesidad y posibilidad histórica de plasmar constitucionalmente un conjunto de “derechos sociales” que al mismo tiempo sirvan de respuesta a las reivindicaciones de un amplio sector social en lucha, consciente de sus derechos y obligaciones, politizado e ideologizado desde la misma cuna del Poder Popular.

Desde el punto de vista jurídico-formal podemos decir que la inclusión de “Derechos Sociales” en la articulación entre el Estado de Derecho y el Estado Social es aquella progresividad de la justicia para darle legalidad al Estado Social de Derecho por el cual se institucionalizaría la Justicia Social y junto con ella la instancia de derechos sociales establecidos en leyes, decretos-leyes, reglamentos, etc. y sobre todo en una nueva estructura de las “Relaciones de Producción” para la construcción y sostenimiento de la Seguridad Social y de las Solidaridades Sociales en el Socialismo de Siglo 21. Ya en la Constitución Bolivariana del 99 se estableció las bases fundamentales de un estado de derecho y de justicia social. En el artículo 2 se contextualiza: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia. Que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Como lo establece el fundamento social y filosófico de este artículo 2 que está transversalizado en toda la Constitución Bolivariana de Venezuela y muy bien fundamentado en su exposición de motivos cuando establece que se define la organización jurídico-política que adopta la Nación Venezolana como un Estado democrático y social de derecho y de justicia. De acuerdo con esto, el Estado propugna el bienestar de los venezolanos, creando las condiciones necesarias para su desarrollo social y espiritual, y procurando la igualdad de oportunidades (y condiciones) para que todos los ciudadanos puedan

desarrollar libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar de los derechos humanos y buscar su felicidad.

Los principios de solidaridad social y del bien común conducen al establecimiento de un estado social, sometido al imperio de la constitución y de la ley, convirtiéndolo, entonces, en un Estado de derecho. Estado social de derecho que se nutre de la voluntad de los ciudadanos, expresada libremente por los medios de participación política y social para conformar el Estado Democrático. El Estado Social y Democrático de Derecho comprometido con el progreso integral que los venezolanos que aspira al desarrollo humano que permita una calidad de vida digna, aspectos que configuran el concepto de Estado de Justicia.

Se corresponde esta definición como una de las principales motivaciones expresada en el Preámbulo, es decir, el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad de justicia social. Ya no sólo es el Estado el que debe propugnar la justicia social, sino también la sociedad.

Es justamente la sociedad, junto al Estado Socialista, la que debe asumir la organización y estructuración de un Nuevo Sistema, de un Nuevo Modo de Producción y de unas Nuevas Relaciones de Producción. Con el nuevo Estado Social, las sociedades en conjunto serán protegidas de otra manera, intentando básicamente una mejor distribución de la riqueza con la intervención estatal en función de la economía social y de la dialéctica social, que junto con los fundamentos políticos, económicos y sociales, se dirijan hacia un cambio de estructuras en un sistema socialista, donde no solamente la propiedad colectiva quede establecida, sino además, que la propiedad privada en general sea re-dimensionada para estar en función social, junto con los medios de producción básicos y fundamentales para producir bienes y servicios que deben estar en manos de los estamentos sociales, junto a la fuerza del Poder Popular y la sinergia entre Consejos Comunales, el Estado y el Gobierno Revolucionario. Esto nos induce a presentar desde ya, un

debate que hay que abrir ante el soberano, y en todos los estamentos de la sociedad para reformular los paradigmas, axiomas y conceptualizaciones sobre la “propiedad privada”.

La diatriba, la confrontación de ideas y el razonamiento sobre la nueva conceptualización de propiedad, debe estructurar el marco jurídico-legal del nuevo sistema socialista y activar en el colectivo la profundización de la revolución Socialista del Siglo 21; desarrollando la polémica política e ideológica, que además del concepto de la propiedad social hay que debatir sobre los nuevos criterios de la propiedad privada y de la propiedad de los medios de producción dentro del marco del socialismo activo. Lo anterior requiere de un gran esfuerzo de organización, concientización e ideologización para transmutar los viejos esquemas jurídicos y sociales instalados por siglos en el cuerpo social. ¡Hay que transformar el Derecho! Hay que *crear* nuevos saberes y contenidos jurídicos para imbricar o sustituir las viejas lecciones y los vetustos libros del pasado. No es posible establecer cambios sociales radicales, con una literatura jurídica en la cual se formaron nuestros abogados. No podemos desarrollar y establecer nuevos paradigmas de justicia social dentro del marco del socialismo con criterios y conceptos del capitalismo salvaje, son dos esquemas de relaciones de producción y de modo de producción completamente diferentes. Se podría decir que son sistemas jurídicos antípodas o contradictorios; por lo tanto, lo adecuado es comenzar a debatir estos conceptos y abrir el debate desde ya en todos los ámbitos.

El socialismo y las nuevas formas de propiedad privada

La propuesta presentada al país el 2007 no fue un fin ni una llegada, es un punto de partida, así lo ha indicado el Presidente. El ya mencionado artículo 115, establece que la propiedad estará sometida a las contribuciones, cargas, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública y de interés general. También es necesario

establecer que las nuevas doctrinas y filosofías del derecho comparado sostienen que la propiedad no es un concepto sagrado, absoluto y mucho menos supraconstitucional y sus atributos fundamentales son susceptibles de cambios y modificaciones de acuerdo a las nuevas concepciones que establecen las relaciones sociales y el nuevo marco jurídico del “Estado de derecho social”; por eso, el Pueblo y el Estado deben intervenir allí donde el actual sistema de la propiedad privada produjese injusticias sociales.

La propiedad privada es uno de los derechos más antiguos de la humanidad. Viene del derecho romano y se consolida con la Propiedad Quinaria. De origen, la propiedad privada es extremadamente excluyente y minoritaria ya que eran los quirites, pequeño grupo de ciudadanos romanos, los cuales constituyen la situación jurídica de señorío pleno romano que califica para la tenencia de la propiedad privada, lo que quiere decir, que para detentar la propiedad era necesario que el titular fuese ciudadano romano. Los romanos desarrollaron así un despliegue teórico con figuras conceptuales que se desenvuelven en la vida práctica de la época a través de la adquisición de cosas, de bienes, etc. que luego se convertía en propiedad privada y generaban derechos. Mediante el ejercicio de estos derechos y obligaciones adquiridas a través de la propiedad, *y como todo derecho tiene en principio sus limitaciones*, se encuentra sujeto a restricciones de diversa índole, bien por su ejercicio frente a otros ciudadanos, bien por razón de situaciones de progresividad sociales que con mayor relevancia predominaban preferentemente al ejercicio de este derecho cuando se afecta estructuralmente a grandes multitudes de ciudadanos. En todo caso, resulta de especial trascendencia el estudio de este tema puesto que constituye un coto a una posible y total liberalidad de abusos de poder al ejercer dicho derecho que eventualmente pudiera constituir un agravio frente a terceros. La propiedad privada en los tiempos actuales ha degenerado ese “derecho” de posesión en instrumentos de poder y en herramienta de dominio y exclusión, por eso, la propiedad privada tiene que tener limitaciones,

restricciones y reformulaciones para evitar los excesos perniciosos en una sociedad de dominio y exclusión.

Es cierto que el sentido de pertenencia es congénito. Lo manifestamos al nacer en los primeros movimientos de relación con el entorno. Todos los juguetes son míos. Es un acto por supuesto irracional, instintivo, pero también es un acto de defensa. La manifestación de pertenencia es un acto de subsistencia y relacional en la infancia. Luego el marco cultural y familiar instalará y fijará este concepto de pertenencia y propiedad con las distorsiones irracionales de la infancia mediante la cotidianidad, la formación, la cultura, el influjo social y familiar, la ideología capitalista, etc. que han estructurado en el ciudadano aberraciones degenerativas de este derecho de propiedad privada. De tal suerte que todos los objetos se convierten en instrumento de dominio que muchas veces no sirven para llenar necesidades y esta es la razón fundamental del derecho de propiedad. *El derecho de propiedad debe estar determinado por la satisfacción de las necesidades que el bien o la cosa proporcionan directamente al propietario o usuario.*

Los objetos, cosas o bienes sirven para satisfacer necesidades de subsistencia, y esas necesidades como acabamos de considerarlo muy brevemente son de índole muy variada. Unas son necesidades que están más propiamente vinculadas con esa categoría social del hombre, muchas de ellas entran en la clasificación de lo superfluo y banal y no contribuyen generalmente al desarrollo del hombre si no más bien, por ellas, al sometimiento del hombre por el hombre. La mecánica de dominio social se instrumenta por los bienes de consumo fútiles que afectan a la mayoría los diversos grupos sociales. Otras son las necesidades obviamente individuales, como la alimentación, el vestido, la vivienda, la salud, el desarrollo intelectual (derecho a la educación), necesidades morales y espirituales del hombre, etc. y estas necesidades son personales e intransferibles. Los bienes que satisfacen las necesidades vitales de subsistencia, y forman parte generalmente de los derechos humanos del hombre como: vivienda, salud, alimentación, educación, entre

otros, no deben ser objetos que generen derecho de propiedad, porque esta propiedad se puede convertir en un factor pernicioso de usura y explotación. La propiedad privada debe tener limitaciones, condiciones y restricciones para que se convierta en derecho o para que genere derecho a su posecionario o propietario. La propiedad privada debe ser sectorizada y tener como únicos atributos, el de uso, goce y *disposición-limitada*. Este nuevo criterio de la disposición-limitada debe ser objeto de debate y discusión porque introduce elementos y conceptos nuevos insertados en el marco orgánico de una economía social y en un Estado de Derecho Social, dentro de un sistema socialista con unas relaciones de producción que desarrollen la justicia social y la propiedad social.

Pongamos como caso uno de los elementos o bienes fundamentales para el hombre como es la “vivienda o hábitat”. El derecho que se genera de la propiedad privada de la vivienda tiene que ser condicionado, reglamentado y limitado ya que no se puede mercadear este bien con criterios atávicos en el ordenamiento jurídico del capitalismo, que tiene como fin y función económica, la reproducción de capital, creación de plusvalía y no la satisfacción de necesidades humanas y sociales. Este bien no debe ser un medio crematístico. La vivienda para el ciudadano es un bien de *uso intrínseco* y estos bienes por cumplir necesidades de subsistencia deben considerarse en una legislación especial para su tenencia y propiedad. *El uso intrínseco es la correspondencia indivisible de uso de un bien y un usuario en forma personal, individual y directa. El uso intrínseco es el valor de uso establecido de acción directa, exclusiva, personal y recíproca, entre el bien y el usuario. Es cuando la acción de beneficio y bienestar del bien que establece vínculos activos de subsistencia, recae única y exclusivamente en forma unipersonal. El uso intrínseco, es cuando se establece un vínculo de uso y acción entre el sujeto y el objeto, es decir, entre el sujeto y la cosa, entre el sujeto y el bien. Es un vínculo activo de subsistencia entre el usuario y el bien. Pongamos por caso un propietario de diez viviendas, de las cuales el habita o usa una, como corresponde, las otras nueve las tiene en uso de alquiler a nueve usuarios o inquilinos. La vivienda que el usa establece un*

vínculo de uso existencial de él con esa vivienda en específico, es decir, un uso intrínseco. En cambio no mantiene un uso intrínseco con las otras nueve viviendas, en cambio los otros nueve inquilinos sí mantienen un uso intrínseco con la vivienda que habitan.

Los bienes de “uso intrínseco” además de cumplir la satisfacción de necesidades humanas de subsistencia deben cumplir la cualidad de la “acción recíproca” del bien o la cosa. *La acción recíproca es el proceso de interacción bidireccional entre dos elementos o agentes, bien puede ser entre un ser humano y la vivienda*, como el ejemplo propuesto. Esa interacción de uso y pertenencia para cubrir la necesidad de subsistencia establece una “acción recíproca” individual entre el bien y el ciudadano, en este caso, entre la vivienda y el ciudadano que es el que recibe la acción de beneficio del bien. Es recíproca por que los beneficios del bien recaen sobre el usuario y los beneficios de cuido, mantenimiento, etc. del bien vivienda son generados por el usuario y recae en acción directa sobre el bien. La acción recíproca es uno de los procesos básicos mediante el cual nos interrelacionamos con el entorno y los bienes básicos personales y de subsistencia que nos rodean. *La interacción, por definición, es una acción recíproca.*

La propiedad privada es una herramienta intrínsecamente interactiva que ha hecho que el concepto de interacción entre humanos y bienes se estudie profundamente. La interfaz de usuario y propiedad permite un nivel de interacción y uso mucho mayor que la vieja línea jurídica de posesión a ultranza, aún cuando el bien no produzca beneficio de bienestar de uso y satisfacción de necesidades a su propietario, si no instrumento o medio para la reproducción de capital.

La acción recíproca se fundamenta en el principio de acción y reacción de la ley recíproca de las matemáticas, que en conjunción con la “teoría del valor utilitario” describen las relaciones que se presentan en un sistema económico y que se manifiestan exclusivamente en magnitudes cualitativas y no en magnitudes cuantitativas, únicamente como enfoca el capitalismo usurero a la propiedad privada, es decir, que se pueden expresar de manera

cualitativa cuando la propiedad privada cumple funciones sociales o de necesidades vitales de subsistencia para el ser humano.

Estos bienes que cumplen con las características antes señaladas, producto de los nuevos estudios, tesis y concepciones, se clasifican como bienes de “*propiedad utilitaria*” o bienes de propiedad particular o individual, y deben tener además de los atributos de uso, goce y “disposición-limitada” los atributos de derechos de propiedad como imperecederos, hereditarios e inalienables para calificar como tales y no el atributo de disposición abierta ilimitada para que inadecuadamente sean utilizados como instrumentos de especulación, usura, acaparamiento y explotación de conciudadanos y compatriotas excluidos por diferentes mecanismos y galimatías jurídicas, económicas y sociales de estos bienes; que por su función social, no pueden estar al arbitrio jurídico de estamentos legales superados por un Estado de Derecho y de Justicia Social en un sistema de economía social. Bienes sociales de “propiedad utilitaria” como la vivienda, la salud, el vehículo particular, artefactos de entorno y una gran variedad de bienes de interrelación vital, no pueden estar destinados con fines de explotación para obtener beneficio crematístico y mucho menos con fines de obtener beneficios de plusvalía recurrente (alquiler de vivienda, por ejemplo).

Por lo anterior, todos los ciudadanos deben tener derecho a la propiedad de una vivienda digna considerada domicilio o residencia y declarada “vivienda principal y asentamiento del hogar”, siempre que ella satisfaga las necesidades humanas de “uso intrínseco”, es decir, necesidades naturales, y sociales de hábitat; obtendrá todos los derechos de la propiedad sobre esa vivienda, u otra vivienda secundaria, vacacional, o de reposo etc. Quien detenta por derecho el bien vivienda principal y es “sujeto usufructuario” o “ciudadano usuario” o “individuo requiriente”. Esto puede desarrollar una nueva forma de propiedad llamada “*propiedad personal*” o “propiedad particular” o “propiedad utilitaria” o “propiedad de uso vital”, porque estos conceptos establecen una conexión entre la “necesidad intrínseca” del individuo y el uso, goce y

beneficio del bien en forma directa, particular y privada, lo cual indica que estos bienes no se deben destinar a el uso de la comercialización y explotación del bien usufructuado con fines crematísticos o de plusvalía.

La modificación de los artículos 115 y 82 de La Reforma propuesta en 2007, más los artículos 113 y 114 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, abre los caminos para profundizar en los nuevos paradigmas, axiomas y conceptualizaciones jurídicas para desarrollar los contenidos y saberes de las nuevas “relaciones de producción” de una economía social dentro del socialismo del siglo 21.

El artículo 82 propuesto en su primera parte dice textualmente: “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas y especialmente la de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales de decreto para la construcción, adquisición o ampliación de vivienda.

Toda persona tendrá derecho a la protección de su hogar o el de su familia declarándolo como vivienda principal ante los órganos del Poder Popular, y por tanto no podrán acordarse ni ejecutarse medidas preventivas o ejecutiva de carácter judicial, sin más limitaciones que las prevista en la ley o convención en contrario”. En el artículo 113 de nuestra Constitución vigente desde diciembre de 1999 aprobada por el soberano con 73 % del electorado, se expresa taxativamente: “No se permitirán monopolios...”. Y el 114 expresa: “El ilícito económico, la *especulación*, el *acaparamiento*, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley”. Estos cuatro artículos son la plataforma jurídica que junto a la nueva conceptualización del derecho social, más los nuevos saberes jurídicos y

económicos desarrollados en las nuevas estructuras sociales, políticas y económicas en marcha en Venezuela, hace pertinente desde ya, empezar a debatir sobre el derecho de la propiedad privada de acuerdo a los planteamientos inéditos presentados en este trabajo para abrir la diatriba sobre la nueva “*propiedad privada sectorizada*”, expuestos anteriormente como: “*disposición limitada*” de la propiedad, “uso intrínseco”, “acción recíproca”, “propiedad utilitaria”, “propiedad personal”, “propiedad particular”, “propiedad de uso vital” “propiedad innata” y otros nuevos criterios que han sido expuestos, explicados y fundamentados en el presente trabajo. Todo lo anterior nos conduce a proponer que existen bienes que no pueden ser susceptibles de derechos aplicando los conceptos atávicos del derecho tradicional y hoy desfasados en una economía social y en un Estado de Derecho Social, como el suelo urbano, el suelo agrario, los espacios acuáticos en su mayoría, los espacios ecológicos, los espacios públicos, las vías de transporte urbanas y extraurbanas, la vivienda y otros más. Podemos continuar con el caso que hemos presentado como ejemplo, el de la vivienda, ya que en ella se concentran las necesidades sociales, los derechos humanos, las necesidades colectivas, el interés social, el bien común, etc. Es inconcebible sustentar y justificar que una sola persona sea propietaria de más de 800 edificios, es decir, más de 16.000 viviendas en Caracas. Esa persona desde luego tiene su buena vivienda para satisfacer su necesidad de hábitat, lo cual indica que las 15.999 viviendas excedentes, de este “propietario”, las convierte y las usa indebidamente como instrumento de usura, agiotismo, especulación, y lo más aberrante, como mercancía de plusvalía recurrente. Este es el criterio que el comercio tradicional calificaba de actividad mercantil sana y exitosa como era comprar una parcela o una vivienda para “engordarla” y luego jugar al acaparamiento, la escasez y la usura. Es irracional y aberrante que un bien como el suelo agrícola que debe ser utilizado para garantizar la seguridad alimentaria de la población o una vivienda que debe ser empleada para garantizar la necesidad de techo propio, de asentamiento

del hogar, de amparo, seguridad y resguardo del ser humano ante las inclemencias del tiempo, se convierta en instrumento vil de la economía crematística, y de la ganancia excesiva como fin, creando exclusión a la casi totalidad de conciudadanos. No se puede permitir que esta práctica infame, ruin e inhumana se siga sustentando con la falsa legalidad de los “derechos” generados por la propiedad privada. No. No se puede invocar una irracional y vetusta juricidad para justificar la atrocidad del terrorismo económico.

Por eso se impone abrir el debate sobre las nuevas formas de propiedad social, entre las cuales proponemos la “*propiedad privada limitada*” donde el atributo de uso y goce están plenamente garantizado, sólo que el atributo de disposición es limitado por cuanto no se puede invocar este derecho de propiedad para acumulación del bien con fines de explotación del hombre por el hombre, con fines monopólicos y de acaparamiento, con el objeto de obtener beneficios a cambio de las necesidades sociales, invocando el principio de transmutar el atributo de disposición ilimitada que contempla el derecho actual en atributo de “disposición limitada” en una área de la “propiedad privada limitada”. Para ello invocamos la relación entre Derecho y Justicia Social, que a través de la teoría de los valores jurídicos, de la axiología jurídica y dentro del marco de la teoría de la justicia que ha venido a sustituir al derecho natural o iusnaturalismo deontológico, y entendiendo al derecho natural no como un hecho petrificado e inmodificable, sino como un valor dentro de la dialéctica social que se inscribe dentro de la teoría de la justicia. La teoría de la justicia hoy por hoy, *y sobre todo en Venezuela*, se fundamenta en el pugilato entre el derecho justo y racional y el neocontractualismo. La relación de controversia entre el Derecho Atávico y el Derecho de Justicia Social debe necesariamente conllevar a un examen crítico del Derecho Positivo en el cual se basa nuestro ordenamiento jurídico, a efecto de verificar si éste incorpora o no sistemas de valores en correspondencia con la nuevas corrientes de justicia social o si continúa en mora con la nuevas realidades esta-

blecidas en la propiedad colectiva y propiedad social, es decir, con la actualización de la democratización de la propiedad privada. Nuestra Constitución Bolivariana incorpora un determinado sistema de valores transversalizados en todo su articulado, desde el preámbulo que es muy determinante hasta el artículo 350, resaltando sobre todo el artículo 2 ya reseñado anteriormente, y junto con los valores especificados en los artículos señalados. Nuestra Constitución Bolivariana contiene principios que tienen una más acusada dimensión jurídica y especificidad sobre el tema de la propiedad privada que se deben redimensionar, profundizar y radicalizar como el artículo 82, 113, 114 y 115 entre otros del texto Constitucional, por lo tanto, cualquier interpretación o nuevas normas jurídicas resultarán constitucionalmente correctas ya que responden a valores consagrados en la Carta Magna. En definitiva, la propuesta presentada, desarrollada y fundamentada en el presente texto para abrir un debate colectivo sobre las nuevas concepciones, discusión que pretende modificar y ampliar las diferentes formas de propiedad privada entre las cuales además de la propiedad pública, la propiedad social, la propiedad social indirecta, la propiedad social directa, la propiedad comunal, la propiedad ciudadana, la propiedad colectiva, la propiedad mixta y la propiedad privada se agregue la nueva forma de “*propiedad sectorizada*” que reglamente y normatise un sector de bienes considerados para el colectivo y la sociedad como “propiedad de uso vital” o “propiedad utilitaria” fundamentado en los conceptos económicos y filosóficos de los bienes de “uso intrínseco” que establece en el derecho de propiedad una limitación del atributo de disposición, estableciendo la cualidad de “bienes de disposición limitada”. Entre los cuales se encuentran el suelo, la vivienda y otros bienes de uso vital. A esta propuesta debe agregársele en paralelo para profundizar el socialismo, la reglamentación a los medios de producción para trasmutarlo de medios de propiedad privada a medios de propiedad colectiva y social.

TEXTO ANEXO. Tomado de *El Libro Verde de Muammar Gadhafi*, p. 61.

“LA NECESIDAD: la libertad del hombre siempre será incompleta mientras sus necesidades estén supeditadas a terceros. La necesidad puede conducir a la esclavitud del hombre por el hombre. Así, la explotación es resultado de la necesidad, que constituye un auténtico problema. Con esto, la lucha surge de la supeditación de la necesidad del hombre”.

“LA VIVIENDA: constituye una necesidad ineludible para el individuo y la familia, por lo cual no debe ser propiedad de otros. Un hombre no tendrá libertad mientras habite una vivienda propiedad de otro, a cambio o no de un alquiler. Por ello, todos los intentos realizados por los distintos Estados del mundo, para tratar el problema de la vivienda, no representan, en absoluto, una solución. Esto se debe a que tales intentos no apuntan hacia soluciones radicales y definitivas —es decir, la necesidad de que el hombre sea dueño de su vivienda— sino que han girado en torno del valor de la renta. Nadie tiene derecho a construir una vivienda que exceda de sus propias necesidades y de la de sus sucesores, con el propósito de arrendarla. La vivienda representa una necesidad para otros y su construcción con el fin de arrendarla es tanto como emprender el control de la necesidad de los demás. Y en la necesidad radica la libertad”.

¡La vivienda no es una mercancía es un derecho social!

JOSÉ MONSALVE CÁCERES

Monsalve3m@hotmail.com



COORDINACIÓN DE EDICIONES Y PUBLICACIONES / IMPRENTA UBV

2500 ejemplares

Mayo 2008